



Comunidad
de Madrid

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

Dirección General Asistencial
CONSEJERÍA DE SANIDAD

MEMORIA JUSTIFICATIVA SOBRE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS Y SOBRE LA ELECCION DEL PROCEDIMIENTO, LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y OTROS ASPECTOS REFERIDOS AL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO: “40 PLAZAS DE INGRESO Y 10 PLAZAS DE HOSPITAL DE DÍA EN HOSPITAL DE SALUD MENTAL Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES III”

INSUFICIENCIA DE MEDIOS

El contrato tiene como finalidad dar continuidad al de referencia PA 6/2021 denominado: “40 PLAZAS DE INGRESO EN HOSPITAL DE SALUD MENTAL Y TRATAMIENTO DE TOXICOMANÍAS”, que finaliza el próximo 31 de mayo de 2026 sin posibilidad de prórroga (Nexus A/SER-031053/2021).

El objeto del contrato es la prestación del servicio consistente en la gestión de 40 plazas de Ingreso y 10 plazas de hospital de día en un hospital de salud mental y tratamiento de adicciones. Las plazas van dirigidas a desintoxicar y deshabituar a pacientes con diagnóstico de trastorno por consumo de sustancias, graves, con o sin otras patologías mentales, que no pueden ser abordados en esta fase desde el tratamiento ambulatorio.

La amplitud y las especiales características del objeto del contrato, reflejado todo ello en el pliego de prescripciones técnicas, impide que la prestación de estos servicios pueda ser ejecutada con personal propio. Por otro lado, tampoco se dispone de material y equipamiento suficiente para dar cobertura a los trabajos cuya contratación se pretende. En consecuencia, cabe concluir que el Servicio Madrileño de Salud no puede prestar con medios propios este servicio y debe recurrir a su contratación pública, conforme con las exigencias establecidos en los artículos 28.1 y 116.4 f) de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

ELECCION DEL PROCEDIMIENTO

Con objeto de garantizar la libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores, y una eficiente utilización de los fondos públicos, la licitación y adjudicación del contrato se realizará a través de un procedimiento abierto con pluralidad de criterios, que es el que la Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 131.2, establece como procedimiento ordinario.

Por un lado, el procedimiento abierto es el que proporciona mayores niveles de publicidad y transparencia, que garantizan la no discriminación e igualdad de trato, y por otro, la utilización de una pluralidad de criterios permite adjudicar el contrato a la oferta que, cumpliendo con los requisitos técnicos mínimos exigidos en los

pliegos, presente la mejor relación calidad-precio, lo que facilita seleccionar la oferta más ventajosa y, en consecuencia, garantizar una eficiente utilización de los fondos públicos.

JUSTIFICACION DE NO DISTRIBUIR EN LOTES DEL CONTRATO

No se ha dividido en lotes ya que la atención sanitaria del objeto del contrato constituye una unidad operativa y funcional en la que los distintos servicios asistenciales que se prestan están orientados a una misma finalidad, no permitiendo su fraccionamiento en lotes con el fin de ofrecer una mayor eficacia y eficiencia en la ejecución y continuidad del tratamiento ya que los pacientes podrán ser derivados de una unidad a otra en función de la necesidad asistencial que requieran.

INFORME SOBRE EL CARÁCTER PLURIANUAL DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la prestación de asistencia sanitaria a personas adictas a sustancias con el propósito de realizar un tratamiento desintoxicación y de deshabituación

La interrupción de la prestación, o el cambio frecuente de contratista que no facilitara cierta estabilidad temporal en la prestación del recurso, tendría consecuencias muy negativas en el tratamiento de la población atendida, por lo que es necesario garantizar su continuidad ininterrumpida y máxima uniformidad en la prestación del servicio con objeto de conseguir la vinculación de los pacientes con el recurso.

Por todo lo anterior, y conforme con el artículo 55 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, se propone un periodo de ejecución del contrato superior al ejercicio económico, con la siguiente distribución por anualidades:

ANUALIDADES			
2026	2027	2028	TOTAL
1.601.120,00 €	2.727.570,00 €	1.133.510,00 €	5.462.200,00 €

JUSTIFICACION DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con el art 202 es obligatorio establecer al menos una de las condiciones especiales de ejecución referidas a consideraciones económicas, relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental, de tipo social o relativas al empleo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado Séptimo del Acuerdo de 3 de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno, los órganos de contratación deberán incluir, al menos, una condición especial de tipo social,

medioambiental o relacionada con la innovación, siempre que esté vinculada al objeto del contrato, no sea discriminatoria y sea proporcionada y compatible con el derecho comunitario.

En cumplimiento de esta normativa, y en la medida en que el mantenimiento o mejora de los valores medioambientales puedan verse afectados por la ejecución del contrato, los licitadores deberán presentar una declaración responsable donde determinen claramente la línea de actuación dirigida a la implementación de estrategias de gestión medioambiental, tal y como queda detallado en el Acuerdo de 3 de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde indiquen detalladamente los planes dirigidos a la promoción del reciclado de productos, vinculados con la prestación del servicio que se oferta.

El cumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución del contrato tendrá el carácter de obligación esencial, siendo el incumplimiento de cualquiera de ellas causa de resolución del contrato de conformidad con lo señalado en el artículo 211.1.f) de la LCSP

JUSTIFICACION DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y TÉCNICA O PROFESIONAL

La solvencia económica y financiera requerida deberá resultar proporcional al objeto del contrato, no debiendo en ningún caso suponer un obstáculo a la participación de las pequeñas y medianas empresas o de las entidades sin ánimo de lucro que suelen participar en las licitaciones a este tipo de contratos. Por tal motivo, pero teniendo en consideración que con dicha solvencia se debe acreditar la capacidad de la entidad adjudicataria para hacer frente a las prestaciones objeto del contrato, se ha establecido como solvencia económica y financiera suficiente que el volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, deberá ser igual o superior al importe del 70% de la anualidad media del presupuesto del contrato.

La solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad. En el caso que nos ocupa, la solvencia técnica se asocia al presupuesto de ejecución del contrato y se vincula con el objeto del contrato, estableciéndose en el PCAP que se entenderá acreditada, de acuerdo con la actividad a desarrollar objeto del contrato, mediante la experiencia en la gestión de hospitales públicos o privados para el tratamiento de desintoxicación y deshabituación a pacientes con diagnóstico de trastorno por consumo de sustancias, con autorización sanitaria y cartera de psicología clínica y/o psiquiatría de al menos cuatro puestos a jornada completa durante todo el periodo de actividad, por un importe igual o superior al 70% de la anualidad media del presupuesto del contrato.

JUSTIFICACION DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS

Se considera que los criterios que sirven de base para la adjudicación del contrato cumplen los siguientes requisitos:

- a) Están vinculados al objeto del contrato.
- b) Han sido formulados de manera objetiva, con pleno respecto a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad y no confieren al órgano de contratación una libertad de decisión ilimitada.
- c) Garantizan que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva, al acompañarse de especificaciones que permiten comprobar de manera fehaciente la información facilitada por los licitadores y así evaluar en qué medida las ofertas cumplen los criterios de adjudicación.

La ponderación escogida (49 % oferta económica, 51 % criterios cualitativos evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas) es conforme a lo establecido en el artículo 146 de la Ley 9/2017, en concreto: “cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, en su determinación, siempre y cuando sea posible, se dará preponderancia a aquellos que hagan referencia a características del objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las formulas establecidas en los pliegos”. Se ha establecido un sistema que ha sido formulado de manera objetiva y se ha descartado aplicar criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor.

Se considera que los criterios cualitativos que sirven de base para la adjudicación del contrato garantizan que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva, al acompañarse de declaraciones responsables de las entidades licitadoras, que permiten comprobar de manera fehaciente la información facilitada y así evaluar en qué medida las ofertas cumplen los criterios de adjudicación.

Entre los criterios cualitativos se han incluido aquellos que tienen que ver con las instalaciones donde se presta el servicio y otros relacionados con los recursos humanos destinados. En ambos casos criterios vinculados al objeto del contrato.

En relación con las instalaciones del centro, indicar que la disponibilidad de habitaciones individuales es imprescindible para el tratamiento de determinados pacientes, por lo que el PPT se establece este número mínimo. Adicionalmente, se ha incluido como criterio de adjudicación la oferta de un número mayor de habitaciones, donde mejorarían las condiciones de comodidad e intimidad de los pacientes ingresados, que redundaría en la mejora de la calidad asistencial prestada y repercutiría en su recuperación. Por otro lado, para este tipo de pacientes, disponer de instalaciones para la actividad deportiva mejora su salud física y, en consecuencia, facilita sus tratamientos de desintoxicación y deshabituación.

También se han establecido criterios de adjudicación relativos a los recursos humanos que la entidad adjudicataria se compromete a adscribir a la ejecución del contrato, tanto en el número de profesionales destinados, como en su grado de especialización técnica, docencia, formación e investigación, criterios todos ellos vinculados al objeto del contrato y que incide en la calidad del servicio prestado.

El punto 4 del PPT establece la plantilla mínima con que se debe contar para prestar el servicio en las condiciones establecidas. Sin embargo, un incremento del número de profesionales destinados en el centro permitiría un reparto de la carga de trabajo que incidiría directamente en la calidad del servicio prestado, con una disminución de las listas de espera y con más tiempo disponible para el ejercicio la labor asistencial por parte de estos profesionales.

En este mismo sentido se han incluidos criterios de adjudicación relativos a la docencia, formación e investigación del personal adscrito a la ejecución del contrato. Aspectos como la docencia en las rotaciones del personal en prácticas, la realización de un estudio de evaluación, con resultados de impacto y remisión en el tratamiento hospitalario de Adicciones, o la participación en cursos de un plan de formación continuada, inciden en el desarrollo de las carreras de los profesionales implicados, y contribuyen a su consolidación científica y técnica, lo que finalmente repercutirá en la calidad asistencial prestada a los pacientes.

Tanto para el criterio relacionado con el precio como con los relacionados con la calidad del contrato, se ha aplicado una fórmula que permite un reparto proporcional de puntos en función de las ofertas presentadas.

JUSTIFICACIÓN DE EXIGENCIA DE UNA GARANTÍA COMPLEMENTARIA

El art. 107 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público establece que, en casos especiales, el órgano de contratación puede exigir en el pliego de cláusulas administrativas particulares que, además de la garantía definitiva, el licitador que vaya a ser propuesto como adjudicatario preste una garantía complementaria de hasta un 5 por ciento del precio que haya ofertado, IVA excluido. En este mismo artículo la ley considera que, a estos efectos, constituye un caso especial aquel en el que la oferta presentada por el adjudicatario resultara inicialmente incurso en presunción de anormalidad.

Como se describe en el informe de necesidad del contrato, las unidades hospitalarias son una herramienta importante para el tratamiento de pacientes adictos a drogas, y su interrupción podría tener consecuencias negativas en la evolución de la enfermedad dadas las especiales características de este tipo de pacientes. En este sentido se deben tomar todas las medidas que puedan garantizar la continuidad y buena ejecución en la prestación del servicio, y entre ellas, el art. 107 de la LCSP nos permite establecer en el pliego de prescripciones administrativas particulares del expediente de contratación que el licitador que vaya a ser propuesto como adjudicatario preste una garantía complementaria del

5 por ciento del precio de su oferta, IVA excluido, si su oferta resulta inicialmente incurso en presunción de anormalidad, lo que se considera indicado en este caso.

JUSTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA DE UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Durante la ejecución del contrato, no garantizar de forma expresa la reparación de los daños que puedan sufrir las personas o las cosas, de modo muy especial las que constituyan el objeto mismo de la prestación, puede tener consecuencias negativas en la continuidad y seguridad de la asistencia a los pacientes, y por este motivo se entiende que está suficientemente justificada la necesidad de que el adjudicatario del contrato cuente con un seguro para cubrir la responsabilidad civil sobre los daños causados durante la prestación del servicio en las personas o en los bienes muebles e inmuebles objeto de la actividad contratada.

Las coberturas del seguro de responsabilidad civil que se pretende contratar, y sus límites económicos por siniestro, son los que se exige al contrato actualmente en vigor, y al que el nuevo contrato debe dar continuidad. En este sentido se han demostrado que ni son desproporcionados ni limitan la concurrencia de licitadores, ya que han podido ser asumidos por la entidad adjudicataria.

Por otro lado, para determinar el presupuesto base de licitación del nuevo contrato, como se describe en la memoria económica del expediente, se han tenido en cuenta los costes de carácter general que para la ejecución del contrato soportan estas entidades, costes entre los que se encuentra el del seguro de responsabilidad civil requerido.

JUSTIFICACIÓN DEL REGIMEN DE INFRACCIONES Y PENALIDADES POR EJECUCIÓN DEFECTUOSA DEL CONTRATO

En el PCAP se recogen expresamente las penalidades por ejecución defectuosa del contrato de acuerdo con el régimen de infracciones y penalidades que se describe.

Las infracciones que se establecen están relacionadas con incumplimientos de las obligaciones establecidas expresamente en los pliegos referidas a las condiciones en que los servicios deben ser prestados para la ejecución del contrato. A título de ejemplo pueden mencionarse el incumplimiento de horarios, no ejecutar el servicio conforme con el proyecto de gestión clínica, no acatar las instrucciones dictadas por la dirección del centro, etc.

Existe una relación evidente entre la buena ejecución del servicio y el adecuado tratamiento y diagnósticos de los pacientes, que es el fin último perseguido por el contrato, por lo que un incumplimiento de las obligaciones contractuales que redunde en la calidad de las prestaciones del servicio debe ser objeto del régimen

de penalidades propuesto, cuya cuantía se ha establecido de manera proporcional en relación con la gravedad de la infracción.

LA DIRECTORA GENERAL ASISTENCIAL DEL SERMAS

Firmado digitalmente por: QUINTANA MORGADO ALMUDENA
Fecha: 2026 02 06 13:45

Fdo.: Almudena Quintana Morgado